

Habían llegado hace 20 días

Más de 300 familias fueron desalojadas en toma de Cerro Renca

Con decenas de policías y retroexcavadoras esta mañana se desarticuló el campamento que se levantó en febrero. Uno más de los cientos que hay en Chile, un fenómeno que, según especialistas, se agudiza hace más de una década y que es urgente abordar.

Daniela Pérez y Tomás Basaure

“Quiero poder tener donde vivir con mis niños. No quiero que me lo regalen, pero que nos ayuden. Y no sólo a nosotros los chilenos, sino que a todos los que son de otras nacionalidades”, decía esta mañana una de las vecinas del campamento en Cerro Renca que fue desalojada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), el municipio y la Intendencia de la Región Metropolitana. Camionetas cargadas con colchones, muebles, bolsos de ropa y todo lo que las cientos de familias lograron reunir, eran escoltadas por Carabineros, mientras los dirigentes trataban de organizarse para que todo se realizara de manera tranquila.

El campamento, que comenzó el 19 de febrero pasado, según lo que confirmó en entrevista con un matinal el mismo alcalde Claudio Castro, surgió cuando 75 familias llegaron, en su mayoría, del campamento Violeta Parra en Cerro Navía, buscando un espacio. “Nosotros como municipio apoyamos a las familias en la postulación a los subsidios que da el Ministerio de Vivienda. Y nos acercamos a ellos para ofrecércelos. Sin embargo, muchas veces nos rechazaron e incluso nos negaron la entrada”, explicaba.

El terreno en cuestión no sólo está habitado por un campamento, sino que se



La situación de los campamentos está bastante fuera de control en varias ciudades, lo de Renca es solo un ejemplo”.

Iván Poduje.

trata de tres: Esperanza, Renca Dignidad y una zona conocida como Sector 3. En cada uno, hay familias chilenas y migrantes, que como van y vienen no permiten llevar un catastro exacto de cuantos son exactamente. Se estima que serían más de 350. Y según el alcalde, el territorio, además, se divide en diversos propietarios: 2 son de privados, uno es del Instituto Nacional del Deporte y otro es del Serviu.

Se profundiza la crisis habitacional

“La situación de los campamentos está bastante fuera de control en varias ciudades, lo de Renca es un ejemplo solamente”, dice Iván Poduje, arquitecto y consejero de Atisba. En agosto, la consultora publicó un estudio sobre el alza de los campamentos en la Región Metropolitana: entre 2017 y 2020, el número de familias que vivían en ellos se duplicó. Justamente ese año fue el que utilizaron como punto de comparación para realizar el estudio. Con datos de Techo Chile, imáge-

nes satelitales de Google Earth 2020 e información de municipios, se llegó a una reveladora conclusión: en solo tres años, la superficie de campamentos en Santiago aumentó un 84 por ciento.

Una realidad que para el también magíster en Desarrollo Urbano, se replica a nivel nacional. “La cifra de familias viviendo en campamentos en Santiago pasó de 5 mil que había en 2017 a cerca de 19 mil. Ha habido tomas de gran tamaño en zonas urbanas como Maipú, La Florida, Puente Alto (...) También San Antonio, Viña del Mar y Copiapó”, cuenta.

La tendencia al alza, sin embargo, se puede rastrear hasta 2011. “Ese año había 27 mil familias en campamentos. El catastro Minvu 2019 arroja 47 mil (...) Es decir, entre 2 mil a 3 mil familias al año ingresaban a vivir en condiciones de campamentos”, explica Sebastián Bowen, director ejecutivo de Techo Chile. “Pero esta cifra aumenta con mucha fuerza dada la pandemia, de manera exponencial durante el 2020, haciendo que los 47 mil ya sean una



cifra obsoleta. Hoy sabemos que son más de 70 mil familias”, agrega Bowen, que adelanta que la segunda quincena de marzo la fundación lanzará un nuevo catastro, actualizado hasta el 2020.

Respecto a los motivos, Poduje identifica cuatro factores que han profundizado la crisis: el encarecimiento de la vivienda, que desde el 2011 se hizo más patente; la demora en la entrega de soluciones por parte del Estado; la pandemia, que generó que personas que arrendaban no pudieran seguir haciéndolo al quedar sin trabajo; y la aparición de una industria criminal, dice, “que se ha aprovechado de esta condición para estafar a la gente, tomándose terrenos y vendiéndolos”.

El factor económico fue clave para quienes llegaron a habitar campamentos durante la pandemia. “En 2020, el 50% de las familias que se han ido a vivir a un campamento declaran como la principal razón para hacerlo, temas de índole económico o laboral”, dice Bowen. Sin embargo, para la organización, los campamentos son la evidencia de una problemática más profunda: el acceso a la vivienda. “Cuando te fijas en el déficit habitacional que hay, según la CASEN 2017, son cerca de 500 mil familias las que necesitan una solución. Esa cifra se ha mantenido más o menos sostenida en los últimos 10 años. Vale decir, por cada familia que vive en un campamento, te encuentras con otras 8 o 10 viviendo en condiciones de hacinamiento o allegamien-



Si seguimos a este nivel, el problema lo vamos a tener resuelto en 30 años más. Es una olla a presión que no aguanta”. Sebastián Bowen.

El impacto de la pandemia en cifras

En mayo de 2020, Techo y la Escuela de Gobierno UC realizaron la “Encuesta Covid-19 en Campamentos de Chile”. Conversaron con cerca de mil personas de todo Chile, para conocer las graves desventajas de sus hogares para enfrentar la crisis sanitaria, incluyendo hacinamiento, alta prevalencia de empleo informal, infraestructura sanitaria insuficiente, déficit de urbanización y conectividad. Las cifras resultantes son reveladoras: 6 de cada 10 familias perdió todos o casi todos sus ingresos, y sólo un tercio de quienes tenían trabajo lo mantenía. Más de un

tercio de las personas padecía síntomas de salud mental; y 8 de cada 10 declaró estar preocupado por contagiarse. “¿Cómo aplicas medidas de mitigación para prevenir la propagación del virus en un contexto de alta vulnerabilidad social y económica como ésta?”, se preguntaba Diego Gil, de la Escuela de Gobierno UC en entrevista con revista Viernes, de La Segunda. “Nosotros hicimos la encuesta antes de que comenzaran los cuarentenas obligatorias. Y si entonces tuvimos resultados dramáticos, nuestra intuición es que hoy serían aún más graves”.

to”, asegura Bowen y añade: “En Chile hay un campamento visible, pero también hay uno oculto que se esconde en la realidad del hacinamiento, de los conventillos y del arriendo abusivo”.

Hoja de ruta

“Hoy tenemos, con todo este descontrol, una ocupación irregular e informal en sectores de riesgo, terrenos fiscales que podrían destinarse a proyectos ordenadamente y, lo más dramático, es que no se ven hechos que permitan reducir la velocidad de las tomas. Es lo que nos preocupa”, afirma Iván Poduje. “Hay avances, pero no se ve un cambio en las políticas. El ministro de vivienda aduce que está haciendo un catastro de las familias, pero ese catastro lo lleva haciendo hace 6 meses”, agrega. Y por lo mismo, refuerza la idea de la necesidad de una actitud más proactiva por parte del Estado, con mejoras en los subsidios, programas de apoyo para migrantes -30% de los habitantes de las tomas- y un mejor aprovechamiento de los terrenos fiscales.

Bowen, por su parte, cree que para comenzar a avanzar en un camino definitivo al déficit habitacional cero hay tres pilares que considerar: “Primero, un fondo de respuesta habitacional, que nos permita contar con 20 veces los recursos que hoy disponemos para dar soluciones habitacionales. Hoy estamos dando respuesta a 20 mil a 30 mil familias al año, si seguimos a este nivel, el problema lo vamos a tener resuelto en 30 años. Es una olla de presión que no aguanta”, enfatiza. “Segundo, hoy la gestión de vivienda es muy centralizada y hay muchos actores que conocen de manera más pertinente la realidad local que debieran hacerse parte de esa gestión, partiendo por los municipios, ONG, comités y la empresa privada. Y tercero, es muy relevante el suelo. No podemos solucionar la problemática si no disponemos de suelos consolidados para aquellas viviendas sociales. Ahí son importantes los suelos fiscales, pero también hay que llamar al sector privado a invertir en sectores más segregados”, concluye.